



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

FORMA A-53

S E S I Ó N P Ú B L I C A NÚM. 27
O R D I N A R I A
LUNES 3 DE ABRIL DE 2017

En la Ciudad de México, siendo las once horas con cincuenta minutos del lunes tres de abril de dos mil diecisiete, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para celebrar sesión pública ordinaria, los señores Ministros Presidente Luis María Aguilar Morales, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán.

El señor Ministro José Fernando Franco González Salas no asistió a la sesión previo aviso a la Presidencia.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

I. APROBACIÓN DE ACTA

Se sometió a consideración el proyecto de acta de la sesión pública número veintiséis ordinaria, celebrada el jueves treinta de marzo del año en curso.

Por unanimidad de diez votos, el Tribunal Pleno aprobó dicho proyecto.

II. VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Asuntos de la Lista Oficial para la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del lunes tres de abril de dos mil diecisiete:

I. 1/2015

Recurso de revisión en materia de seguridad nacional previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 1/2015, promovido por el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal en contra de la resolución dictada en el expediente del recurso de revisión RDA 0740/15 en sesión de quince de julio de dos mil quince, por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). En el proyecto formulado por el señor Ministro Javier Laynez Potisek se propuso: *"PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundado el presente recurso de revisión en materia de seguridad nacional. SEGUNDO. Se modifica el sentido de la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales dictada en el recurso de revisión RDA 0740/15, en sesión celebrada el quince de julio de dos mil quince, a fin de que, por razones de seguridad nacional sea reservada la información relativa a las rutas de los aviones, así como la hora de salida y llegada de todo tipo de aeronaves del Estado Mayor Presidencial; quedando a disposición de la solicitante la información relativa, para el periodo solicitado, de los lugares de salida y llegada, esto es helipuertos y aeropuertos específicos, de todas las aeronaves que integran la flota presidencial; dejando*



Intocado todo aquello que no fue materia de revisión por esta sentencia”.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales reabrió la discusión en torno al apartado VII, relativo al estudio.

El señor Ministro Pérez Dayán advirtió que el señor Ministro ponente Laynez Potisek circuló una propuesta modificada al proyecto, en cuya primera parte se dio cuenta de la causa de improcedencia, en el sentido de que los dos alcances del sujeto obligado no modificaron el resultado final y, si bien el INAI no refiere expresamente a estos dos alcances, sí los abordó y, en su segunda parte, se estudia el alcance de la suplencia que puede haber en esta materia.

En cuanto al segundo tema, abundó que el promovente del recurso argumentó un indebido tratamiento, pues el solicitante de la información no cuestionó la calidad de reserva que tenía la información en la respuesta a su solicitud, y que el INAI, al resolver el recurso, se excedió en sus facultades, pues el entonces recurrente sólo se inconformó sobre el contenido de la información e insistió en la necesidad de que se entregara completa. Sobre esa base, estimó innecesario reflexionar en este momento sobre la suplencia de la queja en el caso concreto a partir de una causa de pedir; sin embargo, se puede valorar que el recurso del particular, una vez recibida la información, no cuestionó los alcances ni la argumentación que se dio para no entregar tal información, por lo que el agravio formulado en la presente instancia es infundado.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Por lo anterior, consideró correcta la propuesta modificada, con la que se refrenda que este recurso es de plena jurisdicción.

El señor Ministro Pardo Rebolledo no compartió la conclusión del proyecto modificado, aun cuando coincide con parte de su argumentación y construcción.

Indicó que la propuesta concluye en dar acceso al solicitante a las ciudades de donde inician y concluyen los vuelos de la flota aérea a disposición de la Presidencia de la República, con lo que se manifestó en desacuerdo, pues excede la solicitud de transparencia 0210000185114: “Solicito al ESTADO MAYOR PRESIDENCIAL los itinerarios y planes de vuelo de toda la flota aérea a disposición de la Presidencia de la República durante el periodo de julio, agosto, septiembre y octubre de este 2014. También el número y nombres de la tripulación y pasajeros.” Indicó que el proyecto da cuenta de la respuesta a dicha solicitud, por parte de la Unidad de Enlace de la Oficina de la Presidencia de la República, apuntando que se informó “al peticionario que el Estado Mayor Presidencial puso a su disposición, en la modalidad de consulta directa, la documentación relacionada con los planes de vuelo, itinerario y listas de pasajeros que viajaron con el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos durante sus giras de trabajo, en el periodo solicitado”.

Precisó que, posteriormente, el solicitante interpuso recurso de revisión ante el INAI, en los siguientes términos:



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

La respuesta a mi solicitud (planes de vuelo de toda la flota aérea a disposición de la Presidencia de la República durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de dos mil catorce así como el numero y nombres de pasajeros) se restringió a 'los planes de vuelo, itinerario y pasajeros que viajaron con el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos durante sus giras. Es decir, no sólo solicito los datos de las giras sino de absolutamente todas las actividades para las que se hayan utilizado los aviones de la flota aérea a disposición de la Presidencia de la República y qué personas utilizaron las aeronaves. Entiendo los argumentos enviados para no revelar nombres de la tripulación, es decir, personal del Estado Mayor Presidencial, sobre este aspecto no insistiré. Por su atención, gracias". Con ello, resaltó que la única inconformidad del solicitante es que se abarcaran no sólo los viajes oficiales en giras del Titular del Ejecutivo, sino cualquier actividad de los aviones o las aeronaves de su flota.

Finalmente, dado que el sujeto obligado aseguró que no cuenta con esa información y, por tanto, no puede proporcionarla, el INAI la convalidó porque el sujeto obligado dijo que no hay registro de las personas que acompañan al Presidente cuando no se trata de una gira oficial.

Puntualizó que la litis del presente recurso se centró en el acceso que se había dado a los planes de vuelo, itinerarios y lista de pasajeros que viajaron con el Presidente de la República durante sus giras de trabajo, y que la



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

pretensión del recurso del solicitante era tener acceso a la información de cualquier actividad de las aeronaves del Estado Mayor Presidencial, lo cual fue declarado fundado por el INAI y dio el acceso precisado. Al respecto, señaló compartir la parte del proyecto que define el concepto y alcance de la seguridad nacional, como una de las restricciones al derecho de acceso a la información pública gubernamental, con base en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la Ley de Seguridad Nacional, así como la conclusión consistente en que los datos no deben ser proporcionados por razones de seguridad nacional, en las variantes planteadas por el Consejero Jurídico de la Presidencia de la República: salvaguardar la seguridad personal del Presidente de la República y, en su caso, de las personas que viajan con él, así como a la afectación a la inteligencia y contrainteligencia.

No obstante lo anterior, discordó de la distinción entre los planes de vuelo, los itinerarios y las ciudades en donde se generan y concluyen los vuelos, es decir, el criterio debe aplicarse a toda la información vinculada con este tipo de traslados, por lo que no se puede negar el acceso a los planes de vuelo, a las rutas y al itinerario, pero otorgarlo en cuanto a las ciudades donde se generan y concluyen los traslados o vuelos porque, en primer lugar, esos datos no fueron materia de la solicitud de transparencia y, en segundo lugar, tampoco formó parte del recurso resuelto por el INAI. Por tales razones, se pronunció en contra del proyecto.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea se ratificó a favor del proyecto, ahora modificado a partir de las inquietudes de varios señores Ministros. Adelantó que formularía un voto concurrente.

Reconoció que la manera en cómo se instrumentó el presente recurso en la Constitución y en la ley no fue la más técnica, lo que provocó la manifestación de diferentes formas de entenderlo, por lo que el tema es altamente opinable. Recalcó que se trata de un recurso de revisión extraordinario, no de mera legalidad, por lo que se ocupa de cuestiones constitucionales, y no porque simplemente lo resuelva esta Suprema Corte, sino por la materia que debe abordarse.

Agregó que este recurso se ocupa de cuestiones constitucionales porque no sólo se revisa la decisión del INAI de entregar determinada información a un particular, sino de examinar si, en un caso concreto, es correcto el alcance del derecho a la información determinado por el INAI cuando éste entra en conflicto con la seguridad nacional, por lo que a esta Suprema Corte corresponde establecer un precedente constitucional que fije los alcances del derecho fundamental de transparencia y acceso a la información, en este escenario concreto, en conflicto con la seguridad nacional.

Aclaró que no sólo el derecho a la información tiene rango constitucional, sino también la protección de la seguridad nacional. En este sentido, el artículo 6° constitucional no sólo indica que “El Consejero Jurídico del



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Gobierno podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos que establezca la ley, sólo en el caso que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional conforme a la ley de la materia”, sino además que “Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes”; por lo que la seguridad nacional es un principio constitucional que puede limitar legítimamente el derecho a la información y, en consecuencia, justificar su reserva en un caso concreto.

Comentó que la doctrina especializada ha señalado que los derechos fundamentales y sus respectivos límites externos operan como principios constitucionales, de tal manera que las relaciones entre el derecho y sus límites encierran una colisión que debe resolverse, en sede constitucional, con ayuda de las metodologías adecuadas para este tipo de conflictos. Aclaró que ello no supone sustituir al derecho de acceso a la información por el concepto de seguridad nacional ni que este recurso se convierte en una vía de protección a las autoridades, que se aleje del sentido de la reforma constitucional, o la resolución



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

en abstracto de lo que se debe proporcionar o no como información, desde una perspectiva restrictivo-precautoria. En ese tenor, estimó que esta crítica pierde de vista el objetivo de esta vía procesal: generar criterios constitucionales, desde esta Suprema Corte, sobre casos de conflictos entre el derecho a la información pública, con su principio rector de máxima publicidad, y un límite constitucionalmente reconocido a este derecho, a saber, la seguridad nacional.

Subrayó que esta Suprema Corte no evalúa qué significa la seguridad nacional ni genera argumentos para reservar la información, sino que, para resolver el caso, es indispensable interpretar el concepto de seguridad nacional, dado que estos criterios suministrarán argumentos para reservar u otorgar información en casos concretos, puesto que una de las funciones principales de este Tribunal Constitucional consiste en establecer, a partir de casos concretos, los alcances de los derechos fundamentales en conflicto no sólo con otros derechos fundamentales, sino también con los límites externos constitucionalmente reconocidos, entre otros, la seguridad nacional. Acotó que por el diseño constitucional y legal del recurso, esta Suprema Corte sólo está llamada a pronunciarse sobre asuntos en los que el INAI decidió entregar la información a una persona, y el Consejero Jurídico considere que suponga un riesgo para la seguridad nacional, sin que exista posibilidad de que este Alto Tribunal conozca de los casos en los que el INAI decidió no entregar la información por



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

existir un riesgo a la seguridad nacional, salvo que el tema llegue a través de un amparo.

Indicó que dicha asimetría podría generar la impresión de que esta Suprema Corte únicamente limitará el derecho a la información, favoreciendo los intereses de los sujetos obligados; sin embargo, es una falsa impresión, puesto que una posibilidad de decisión sería confirmar la decisión del INAI, cuando este Alto Tribunal entienda que, en ese caso concreto, ha establecido un balance adecuado entre el derecho a la información, su principio rector de máxima publicidad y la seguridad nacional.

Destacó que, en este recurso extraordinario de revisión, están en desacuerdo dos autoridades: el sujeto obligado y el INAI, sobre el balance constitucional correcto del derecho a la información y la seguridad nacional. También resaltó que ni la Constitución —artículo 6°— ni la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública —artículos 189, 190 y 192— establecen expresamente que este recurso sea de estricto derecho, ni que esta Suprema Corte sólo deba ocuparse de los agravios planteados por el Consejero Jurídico, sino que se debe entender que este Alto Tribunal debe resolver una genuina cuestión de constitucionalidad, para lo cual debe examinar ampliamente el problema, incluso, en algunos casos, sin apegarse estrictamente a lo aducido en el escrito de revisión, por lo que esta Suprema Corte tendrá que construir una doctrina constitucional. Finalmente, estimó que no existe una



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

obligación de esta Suprema Corte para atenerse estrictamente a los agravios planteados, pues debe establecer el alcance correcto del derecho a la información en situaciones de conflicto con la seguridad nacional.

La señora Ministra Luna Ramos se apartó de algunas consideraciones del proyecto. Apuntó que, en su primera parte, esta Suprema Corte, en devolución de jurisdicción, declara fundado el agravio hecho valer en el presente recurso, en el sentido de que el INAI no se ocupó de las cuestiones planteadas respecto del sobreseimiento porque se le entregó la información que había solicitado, en razón de que, como se advierte de la página treinta y cuatro de la resolución recurrida, de ninguna manera contestó ese argumento. Se manifestó en favor de esta primera parte del proyecto, salvo algunas cuestiones de forma que podrían ser materia de un voto concurrente.

En cuanto a la segunda parte del proyecto, alusiva al planteamiento de la diferencia entre los helicópteros y aviones, consideró que sale de la litis y, por tanto, se apartaría. Asimismo, anunció que se apartaría de la referencia al alcance del recurso.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales consultó al señor Ministro ponente Laynez Potisek si modificaría el proyecto, de resultar contraria la votación en cuanto a otorgar el dato de las ciudades de partida y llegada de los vuelos.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro ponente Laynez Potisek contestó en sentido afirmativo.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta modificada del apartado VII, relativo al estudio, respecto de la cual se expresó una mayoría de siete votos en contra de los señores Ministros Cossío Díaz, Luna Ramos, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Zaldívar Lelo de Larrea con algunas diferencias argumentativas y Laynez Potisek votaron a favor. La señora Ministra Piña Hernández anunció voto concurrente. La señora Ministra Luna Ramos reservó su derecho de formular voto concurrente. Los señores Ministros Cossío Díaz, Zaldívar Lelo de Larrea y Laynez Potisek anunciaron sendos votos particulares.

El señor Ministro ponente Laynez Potisek ofreció elaborar el engrose conforme a la decisión mayoritaria, por lo que la votación definitiva deberá indicar:

Se aprobó por mayoría de seis votos de los señores Ministros Luna Ramos, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, revocar la resolución del INAI a fin de que, por razones de seguridad nacional, sea reservada la información relativa a las rutas de los aviones, así como los lugares y la hora de salida y llegada de todo tipo de aeronaves del Estado Mayor Presidencial. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Zaldívar Lelo de Larrea y Laynez Potisek



Sesión Pública Núm. 27

Lunes 3 de abril de 2017

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Votaron en contra. La señora Ministra Piña Hernández anunció voto concurrente. La señora Ministra Luna Ramos reservó su derecho de formular voto concurrente. Los señores Ministros Cossío Díaz, Zaldívar Lelo de Larrea y Laynez Potisek anunciaron sendos votos particulares.

Dadas las votaciones alcanzadas, los puntos resolutivos que regirán el presente asunto deberán indicar:

“PRIMERO. Es procedente y fundado el presente recurso de revisión en materia de seguridad nacional. SEGUNDO. Se revoca la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales dictada en el recurso de revisión RDA 0740/15, en sesión celebrada el quince de julio de dos mil quince, a fin de que, por razones de seguridad nacional, sea reservada la información relativa a las rutas de los aviones, así como los lugares y la hora de salida y llegada de todo tipo de aeronaves del Estado Mayor Presidencial; dejando intocado todo aquello que no fue materia de revisión por esta sentencia.”

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados, dejando a salvo el derecho de los señores Ministros de formular los votos que consideren pertinentes.

El secretario general de acuerdos dio cuenta con el siguiente asunto de la lista:



Sesión Pública Núm. 27

Lunes 3 de abril de 2017

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMACORTED JUSTICIA DE LA NACIÓN

N. 5928/2015

Amparo directo en revisión 5928/2015, derivado del promovido por [REDACTED]

[REDACTED], en contra de la sentencia de nueve de marzo de dos mil quince, dictada por la Segunda Sala Regional Norte-Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el expediente de nulidad 2170/13-05-02-7. En el proyecto formulado por el señor Ministro José Ramón Cossío Díaz se propuso: “PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a [REDACTED]

[REDACTED] contra los actos de la autoridad que quedaron precisados en el Apartado II de esta ejecutoria”.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta de los apartados I, II, III, IV y V relativos, respectivamente, a los antecedentes, al trámite del juicio de amparo, a la competencia, a la oportunidad y a la procedencia, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro ponente Cossío Díaz indicó que el apartado VI, relativo a las consideraciones y fundamentos, es básicamente una síntesis de la demanda, de la sentencia, de los agravios y el problema por resolver.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta del apartado VI, relativo a las consideraciones y fundamentos, en los subapartados “Demanda de amparo”, “Sentencia recurrida”, “Agravios” y “Problemática a resolver”, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro ponente Cossío Díaz presentó el apartado VI, relativo a las consideraciones y fundamentos, en los subapartados del estudio de fondo.

Narró los antecedentes del asunto: 1) una persona moral presentó una solicitud de devolución por concepto de saldo a favor del impuesto al valor agregado, 2) la autoridad contestó que no procedía la devolución, en virtud de que una parte de este monto estaba amparada en cinco facturas expedidas por otra persona moral de la cual no se tenía noticia que efectuara la actividad económica que el solicitante manifestó ante el Registro Federal de Contribuyentes, y tampoco se tenía registro del entero de dicho impuesto al fisco federal, 3) esto dio lugar a varios recursos, promovidos tanto por la contribuyente como por la autoridad fiscal, que culminaron con la declaración de validez de la resolución impugnada, 4) contra ésta, la persona moral promovió juicio de amparo directo en el que



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

planteó la inconstitucionalidad de los artículos 5 y 6 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y 63 del Código Fiscal de la Federación, y 5) el tribunal colegiado se negó a analizar el tema de constitucionalidad, con fundamento en el artículo 170, fracción II, de la Ley de Amparo, en el sentido de que el contribuyente debió promover el juicio de amparo desde que la autoridad interpuso la revisión fiscal.

El estudio del proyecto se divide en cinco preguntas, repartidas en tres temas. El primer tema da respuesta a las dos primeras preguntas, respecto de la inconstitucionalidad del artículo 170, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con la promoción del juicio constitucional en contra de resoluciones de nulidad favorables a los particulares. Indicó que existen diversos precedentes. El segundo tema responde las preguntas tres y cuatro, en relación con el artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, en cuanto a que, por un lado, no viola el derecho a la audiencia previa y, por el otro, se declara inoperante el concepto de violación relativo a su inconstitucionalidad, pues la quejosa los hace depender de que la confronta con una norma del mismo rango, esto es, el diverso artículo 130, párrafo quinto, del mismo ordenamiento. El tercer tema desahoga la pregunta cinco, sobre la constitucionalidad de los artículos 5, fracción II, y 6 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y se declaran inoperantes los agravios.

El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena compartió el estudio en sus partes primera y segunda. En la tercera parte,



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

advirtió que sus párrafos ciento veintitrés y ciento veinticuatro no dan respuesta realmente a lo planteado por la quejosa, esto es, ésta argumentó la garantía de audiencia y aquéllos responden a un planteamiento de desigualdad, además de que se agregaron a mayor abundamiento.

El señor Ministro ponente Cossío Díaz modificó el proyecto para eliminar los párrafos ciento veintitrés y ciento veinticuatro.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea recordó no coincidir con los precedentes que interpretaron los alcances del artículo 170, fracción II, de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, votará en contra de las consideraciones del proyecto, pero con el sentido de no otorgar el amparo.

La señora Ministra Piña Hernández se apartó del párrafo ochenta y cuatro, en cuanto a la excepción al principio de agravio directo y actual.

La señora Ministra Luna Ramos solicitó ajustar el proyecto conforme a los precedentes, bajo la ponencia del señor Ministro Laynez Potisek, en los que se discutieron diversas argumentaciones.

El señor Ministro ponente Cossío Díaz señaló tener ubicado el amparo directo en revisión 1066/2016 de la Segunda Sala, bajo la ponencia del señor Ministro Franco González Salas.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales precisó que también se estudió en este Tribunal Pleno el amparo directo en revisión 1100/2015.

El señor Ministro ponente Cossío Díaz modificó el proyecto para ajustarlo a lo resuelto en los amparos directos en revisión 1066/2016 y 1100/2015, en relación con la interpretación del artículo 170, fracción II, de la Ley de Amparo.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta modificada del apartado VI, relativo a las consideraciones y fundamentos, en los subapartados del estudio de fondo, la cual se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Zaldívar Lelo de Larrea en contra de todas las consideraciones, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I. en contra de consideraciones en cuanto a la interpretación de la fracción II del artículo 170, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales. La señora Ministra Piña Hernández anunció voto concurrente.

Por instrucciones del señor Ministro Presidente Aguilar Morales, el secretario general de acuerdos leyó los puntos resolutivos que regirán el presente asunto, en los siguientes términos:

*“PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida.
SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a*



Sesión Pública Núm. 27

Lunes 3 de abril de 2017

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

[REDACTED] contra los actos de la autoridad que quedaron precisados en el apartado II de esta ejecutoria.”

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la congruencia formal de los puntos resolutivos, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

Acto continuo, levantó la sesión a las doce horas con cuarenta y siete minutos, previa convocatoria que emitió a los integrantes del Tribunal Pleno para acudir a una sesión privada, una vez que se desaloje la sala, así como a la próxima sesión pública ordinaria que se celebrará el martes cuatro de abril del año en curso, a la hora de costumbre.

Firman esta acta el señor Ministro Presidente Luis María Aguilar Morales y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, quien da fe.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS